



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Anteproyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

El Anteproyecto sometido a informe tiene por objeto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo relativo a los procedimientos de subasta para la ejecución de bienes embargados, así como de la Ley del Registro Civil, en lo que atañe a las inscripciones de nacimientos y defunciones. Teniendo en cuenta esta estructura el presente informe se dividirá igualmente en tres partes, correspondientes a la reforma de la Ley procesal y la reforma de las normas del Registro Civil, respectivamente, en relación con ambas inscripciones.

## I

En lo que atañe a la subasta de bienes embargados, el Anteproyecto establece diversas previsiones relacionadas con la subasta de bienes muebles, inmuebles y sometidos a prenda o hipoteca, estableciendo fundamentalmente el procedimiento de subasta electrónica de dichos bienes a través del portal del Boletín Oficial del Estado, recogiendo así, tal y como indica la Exposición de Motivos las “medidas normativas que son necesarias (...) para la ejecución de las propuestas relativas a la puesta en marcha de un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en el BOE y a la tramitación electrónica desde los centros sanitarios de los nacimientos y defunciones” adoptadas en el seno de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. En particular, la citada Exposición de Motivos justifica la unificación de los procedimientos en el portal, dado que “un solo portal implica la existencia de una única base de datos, lo que permitirá, por una parte, mantener un solo motor de búsquedas que abarcará la práctica totalidad de las subastas públicas –facilidad para el ciudadano- y por otra, ahorrará significativamente los costes de alojamiento, mantenimiento y desarrollo de la base de datos. La explotación de esa base de datos podrá posteriormente facilitar todo tipo de información y estadísticas”.

Asimismo, se pone de manifiesto en el Anteproyecto, como también indica la citada Exposición de Motivos, que “el Secretario judicial asume un papel primordial en la celebración de subastas judiciales, con el objetivo de favorecer su transparencia. A él corresponde el inicio de la subasta, su



publicación con remisión de los datos necesarios, así como su suspensión o reanudación, manteniendo un control continuado durante su desarrollo hasta su término, a través de una relación electrónica privilegiada con el Portal de Subastas. Y terminada la subasta, el Portal de Subastas remitirá información certificada al Secretario judicial en la que indicará ordenadamente las pujas, encabezadas por la que hubiera resultado vencedora”.

El procedimiento establecido para los distintos supuestos viene a reproducir, en lo esencial, el que aparecía recogido en el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento Hipotecario, aprobado por Decreto de 14 de febrero de 1947, en materia de venta forzosa extrajudicial, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, redactado conforme a la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que fue objeto de informe de esta Agencia en fecha 2 de septiembre de 2013. De este modo, y sin perjuicio de las consideraciones que posteriormente se pondrán de manifiesto, derivadas de la inserción de los procedimientos contenidos en el Anteproyecto en el seno del proceso civil, frente al carácter extrajudicial de los procedimientos regulados por dicho Proyecto informado por esta Agencia, cabe traer al presente informe las consideraciones efectuadas por la misma en el ya citado informe de 2 de septiembre de 2013, en que se señalaba lo siguiente:

*“La reforma operada por el Proyecto implica fundamentalmente el desarrollo de la utilización de medios electrónicos en el procedimientos, partiendo de lo dispuesto en el artículo 129.2 d) de la Ley Hipotecaria, que establece que “La venta se realizará mediante una sola subasta, de carácter electrónico, que tendrá lugar en el portal de subastas que a tal efecto dispondrá la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado”. En este sentido, la Exposición de motivos justifica el contenido de la reforma en los siguientes términos:*

*“Para la realización de la subasta se cuenta con la creación por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado de un portal de subastas, relacionado directamente con cada una de ellas a través del anuncio que el notario ante el que se inicia la venta debe insertar en el mismo Boletín. Característica destacada del nuevo sistema electrónico es que permitirá la recepción de pujas por debajo de la mayor que se hubiera ya realizado, siempre que el postor se avenga a reservar la misma para el caso de que el licitador de la superior no concurriera finalmente a consignar la totalidad del precio. Con ello se evitará que, de forma casual o intencionada, y por no permitirse pujas intermedias, pueda la subasta quedar paralizada por una puja, quizá conscientemente excesiva, cuyo postor no concorra finalmente a la adquisición, permitiendo de esta manera la adjudicación de la finca a una postura inicial muy reducida en detrimento de los intereses tanto del deudor como del propio acreedor. Como complemento a esta*



*nueva regulación, se favorece el uso de las comunicaciones electrónicas, tanto entre notarios y registradores como en general con todas aquellas personas deban recibir algún tipo de notificación, estableciéndose incluso la posibilidad de fijar en cualquier momento, a estos efectos, direcciones electrónicas hábiles. En definitiva se trata también de adaptar las subastas derivadas de la necesidad de realización pública de bienes a las nuevas fórmulas que en estos momentos se están desarrollando satisfactoriamente en internet; fundamentalmente ampliando los plazos de licitación –dando mayor capacidad de reacción a los posibles licitadores, al tiempo que se amplían las posibilidades de que el conocimiento de la existencia de la subasta llegue a un mayor espectro de interesados- y flexibilizando las formas de realizar las pujas, sin detrimento en ningún caso de las garantías que debe acompañar una licitación de estas características.”*

*Entre las garantías que se mencionan en el texto reproducido no sólo deben entenderse comprendidas las que constituyen salvaguardas de la seguridad del tráfico jurídico sino igualmente las que implican la garantía de los derechos de las distintas personas que pudiesen intervenir, por cualquier título, en el procedimiento. Entre dichos derechos ocupa un lugar fundamental, habida cuenta de la naturaleza del procedimiento y los medios empleados en el mismo, el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. De este modo, resulta obvio señalar que el procedimiento se encontrará en todo momento sometido a la normativa de protección de datos, no concurriendo excepción alguna a la aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.*

*Sentada esta premisa, las normas introducidas en el reglamento Hipotecario como consecuencia del procedimiento regulado por el Proyecto sometido a informe implicarán necesariamente diversos tratamientos y cesiones de datos de carácter personal. La mayor parte de dichos tratamientos se encuentra fundado en el principio de publicidad formal del registro de la Propiedad y, en particular, en lo establecido en el artículo 221 de la Ley Hipotecaria, a cuyo tenor “los Registros serán públicos para quienes tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos. El interés se presumirá en toda autoridad, empleado o funcionario público que actúe por razón de su oficio o cargo” y el artículo 222.10 de la citada Ley, que dispone que “la manifestación de los libros del Registro deberá hacerse, si así se solicita, por medios telemáticos. Dicha manifestación implica el acceso telemático al contenido de los libros del Registro. A tal efecto, si quien consulta es una autoridad, empleado o funcionario público que actúe por razón de su oficio y cargo, cuyo interés se presume en atención a su condición, el acceso se realizará sin necesidad de intermediación por parte del registrador. Dicha autoridad,*



*empleado o funcionario público deberá identificarse con su firma electrónica reconocida o por cualquier otro medio tecnológico que en el futuro la sustituya. Cuando el consultante sea un empleado o funcionario público, responderán éstos de que la consulta se efectúa amparada en el cumplimiento estricto de las funciones que respectivamente les atribuye la legislación vigente. En todo caso, la autoridad, empleado o funcionario público no podrá acceder telemáticamente sin intermediación del registrador al Índice de Personas”.*

*Del mismo modo el tratamiento de los datos del notario autorizante y del hipotecante y del acreedor se fundamentarán en la propia regulación del procedimiento establecida en el artículo 129.2 de la citada Ley Hipotecaria, siendo el tratamiento de los intervinientes en la subasta necesario para el eficaz desenvolvimiento de la misma, y en consecuencia amparado en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999 en conexión con el artículo 129 de la Ley.*

*Consecuencia de todo lo antedicho es que el procedimiento en los términos que se han diseñado en el Proyecto sometido a informe resulta ajustado a lo previsto en la Ley Orgánica.*

*No obstante esta conclusión, debe precisarse inmediatamente que la disposición adicional primera del Proyecto establece que “En el plazo de tres meses desde la publicación de este Real Decreto la Dirección General de los Registros y del Notariado aprobará por Instrucción el modelo informático de consulta y los requisitos técnicos necesarios a que se refieren los artículos 222bis de la Ley Hipotecaria y 354 a del Reglamento Hipotecario” y que añade la disposición adicional segunda que “mediante Orden Ministerial conjunta de los Ministerios de la Presidencia y de Justicia se establecerán los requisitos y aspectos técnicos que se aplicarán al sistema de subastas electrónicas”.*

*Es en este desarrollo donde se hará enteramente necesaria la delimitación del modo en que serán aplicadas al procedimiento las normas de protección de datos de carácter personal, teniendo particularmente en cuenta la necesaria determinación del papel que, desde el punto de vista de la citada normativa, jugará el Boletín Oficial del Estado, en el sentido de si el mismo será responsable del tratamiento de los datos que se deriven de la publicación y mantenimiento en el portal de la información relacionada con la subasta, así como de los datos que sean objeto de incorporación y tratamiento durante su desarrollo. Del mismo modo, debería fijarse el papel del Boletín en relación con los procedimientos de identificación y autenticación de quienes intervinieran como postores en la subasta y la información relacionada con los supuestos en los que dicha intervención se produzca en nombre de un tercero.*



*En este sentido, de lo dispuesto en el artículo 236g.bis parece desprenderse el papel de responsable del fichero del Boletín Oficial del Estado. Esta conclusión se corrobora con la referencia efectuada en la Exposición de Motivos al papel del Notario, respecto del que se señala que “A él corresponde el requerimiento de pago, la solicitud de la certificación registral, la notificación a titulares posteriores, la remisión del anuncio de subasta, la recepción del resultado de la misma, y a partir de ahí, llevar a cabo todo el procedimiento con los licitadores que hubieran ofrecido la mayor postura, hasta el otorgamiento de la correspondiente escritura de venta”, sin atribuirle funciones en relación con la celebración misma de la subasta, sin perjuicio de la obligación del Boletín Oficial del Estado de mantenerle en todo momento informado de los extremos establecido en el Proyecto.*

*Por otra parte, una cuestión especialmente relevante a tomar en consideración, habida cuenta de la relevancia de la información a la que se está haciendo referencia, es la relativa al alcance de la publicidad otorgada a la información por el Boletín Oficial del Estado.*

*En este punto, una primera cuestión que se haría necesario dilucidar es la relativa al modo en que se hará pública por aquél la información referente al requerimiento de pago al deudor que hubiera resultado infructuoso o el anuncio mismo de la subasta, dado que en el primero de los casos se hace referencia a la inserción del requerimiento en el Tablón Edictal del Boletín (artículo 236c.4) y en el segundo la publicación aparece exclusivamente referida al propio Boletín (artículo 236f.2).*

*Ello se plantea fundamentalmente por el hecho de que la información contenida en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicidad general, es objeto de indexación por parte de los motores de búsqueda en Internet, siendo así que la indexación del requerimiento de pago o de datos relacionados con la convocatoria de la subasta, vinculados a los sitios en que es posible la obtención de la información mencionada por el artículo 236f.4 pudiera resultar excesiva en relación con la finalidad que justifica la publicidad.*

*A tal efecto, sería conveniente que se clarificase si en la Orden de desarrollo a la que se refiere la disposición adicional segunda se prevé la creación de un tablón edictal electrónico del Boletín Oficial del Estado, en el que constaría la información a la que ahora se está haciendo referencia. Del mismo modo, debe recordarse que esta Agencia ha venido exigiendo, y así se ha recogido por las normas reguladoras de los tableros edictales electrónicos que, sin perjuicio de su accesibilidad*



*general, la información no pueda ser objeto de indexación por los motores de búsqueda.*

*En el mismo sentido, si no se previese la citada creación sería necesario que esa regla de no indexación mediante el uso de las herramientas que actualmente pone a disposición de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, atendido el estado actual de la técnica, fuera igualmente tenida en cuenta si la publicación se llevará simplemente a cabo mediante la publicación del edicto en la versión electrónica del Boletín.*

*Otras cuestiones que esencialmente deberán analizarse por la disposición que desarrolle el sistema derivado de la reforma operada por el Proyecto sometido a informe serán las vinculadas a la seguridad en el tratamiento de los datos a lo largo de todo el proceso y especialmente en las distintas comunicaciones producidas entre los notarios y registradores, tanto entre sí como con el Boletín Oficial del Estado.*

*En consecuencia, esta Agencia ha de concluir que el Proyecto sometido a informe no presenta objeción desde el punto de vista de la aplicación de las normas de protección de datos, si bien las cuestiones planteadas en el mismo y las restantes vinculadas a la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 y sus disposiciones de desarrollo deberán resolverse en la Orden cuya adopción impone la disposición adicional segunda del Proyecto.”*

Como se ha indicado, las conclusiones alcanzadas son extrapolables al supuesto ahora analizado en cuanto a la legitimación y proporcionalidad de la medida desde el punto de vista de la aplicación de la normativa de protección de datos. No obstante, como también se ha indicado, las conclusiones alcanzadas deben adaptarse al carácter procesal de la normativa cuyo Anteproyecto ahora se estudia, dado que no es posible el establecimiento de normas de desarrollo que vengán a establecer un régimen de auto-organización administrativa en la materia que ahora se valora.

Quiere ello decir, que a nuestro juicio, las cuestiones que deberían ser objeto de un desarrollo normativo posterior en el caso de la ejecución extrajudicial, a fin de garantizar su pleno alineamiento con las normas de protección de datos, deberían incorporarse al Anteproyecto sometido a informe, de manera que el mismo completase íntegramente el régimen regulador de las subastas judiciales, incorporando las garantías del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal a su articulado.

Como se desprende del informe reproducido, la materialización de las citadas garantías debería tener en cuenta, en particular, tres cuestiones primordiales: la determinación del responsable del tratamiento, el



establecimiento por el Boletín Oficial del Estado de las medidas necesarias para garantizar la adecuada seguridad de los datos objeto de tratamiento como consecuencia de la realización de la subasta y finalmente el establecimiento de procedimientos que tengan por objeto la no indexación de los anuncios de las subastas a través de motores de búsqueda.

En cuanto a la primera cuestión, el sistema diseñado en el Anteproyecto difiere del establecido en el Proyecto de reforma del Reglamento Hipotecario en el control de la totalidad del proceso por parte del Secretario Judicial, quedando así la subasta integrada, lógicamente, dentro de la ejecución en el proceso civil. Ello hace que no sea posible atribuir al Boletín Oficial del Estado el papel de responsable del tratamiento que, por el contrario sí se preveía en relación con el tratamiento de los datos relacionados con la subasta en el marco del procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

En lo que atañe a la segunda cuestión, sería preciso que el Anteproyecto previese la adopción por el Boletín Oficial del Estado de las medidas de seguridad precisas para garantizar la integridad de la información y los demás extremos establecidos en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.

Por último, en cuanto a la tercera de las cuestiones, el texto sometido a informe debería establecer una previsión que evitase la indexación de los datos personales contenidos en el anuncio de la subasta llevado a cabo en el portal del Boletín Oficial del Estado, a fin de evitar que la situación de la que deriva el embargo de los bienes pudiese resultar accesible por cualquier persona durante un período indefinido de tiempo.

Por todo ello, sería conveniente completar el Anteproyecto sometido a informe con una disposición adicional que estableciese, para todos los procedimientos que recoge el artículo primero del Proyecto las salvedades que, en materia de protección de datos, se acaban de enunciar. Por ello, se propone la adición de la siguiente disposición adicional:

**“Disposición adicional segunda. Protección de datos de carácter personal en la subasta electrónica.**

**1. El tratamiento de datos de carácter personal llevado a cabo en el marco de los procedimientos de subasta electrónica a los que se refiere el artículo primero de esta Ley quedará íntegramente sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.**

**Sin perjuicio de la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales sobre el tratamiento de los datos de carácter personal, corresponde a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado la implantación en el**



**Portal de Subastas de las medidas técnicas y organizativas a las que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.**

**2. Los sistemas de búsqueda que implante la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado contarán con los mecanismos necesarios para evitar la indexación y recuperación automática de los anuncios de subasta electrónica por medio de motores de búsqueda desde Internet.”**

## II

Como ya se ha indicado, en segundo lugar el Anteproyecto de Ley sometido a informe tiene por objeto la reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, en lo relativo a las inscripciones de nacimientos y defunciones. Del tenor de los preceptos objeto de reforma, y estrictamente en lo que atañe a su incidencia en relación con el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, cabe hacer referencia a la reforma operada por el Anteproyecto de tres preceptos concretos, si bien de dicha regulación se derivarán dos cuestiones diferenciadas a analizar en el presente informe. En particular, los preceptos que resultan relevantes a los efectos del análisis son los siguientes:

- En relación con la defunción, el artículo 66 añade a la redacción actual del precepto un nuevo inciso, en cuya virtud “En el certificado, además de las circunstancias necesarias para la práctica de la inscripción, deberán recogerse aquellas que se precisen a los fines del Instituto Nacional de Estadística y, en todo caso, la existencia o no de indicios de muerte violenta, la incoación o no de diligencias judiciales o cualquier otro motivo por el que, a su juicio, no deba expedirse la licencia de enterramiento”.

- Por su parte, en cuanto al nacimiento, el párrafo primero del artículo 46 de la Ley 20/2011 es modificado, añadiendo al mismo que “El personal sanitario que asista al nacimiento deberá adoptar, bajo su responsabilidad, las cautelas necesarias para asegurar la identificación del recién nacido y efectuará las comprobaciones que establezcan de forma indubitada la relación de filiación materna. Reglamentariamente se determinarán las pruebas biométricas, médicas y analíticas precisas para asegurar dicha relación, así como la forma de hacer constar en el Registro sus resultados. En ningún caso será necesario el consentimiento de los progenitores para la toma de datos o muestras que permitan la correcta identificación del nacido, las cuales no podrán ser utilizadas para otros fines distintos de la identificación del nacido y la determinación de la relación materno-filial, dentro del correspondiente proceso penal o en caso de reclamación o impugnación judicial de la filiación materna”.





- En relación con esta última previsión, el artículo 67.3 pasa a disponer que “Cuando el fallecimiento hubiere ocurrido con posterioridad a los seis primeros meses de gestación, antes del nacimiento, y siempre que el recién nacido hubiera fallecido antes de recibir el alta médica, después del parto, el certificado médico deberá ser firmado, al menos, por dos facultativos, quienes afirmarán, bajo su responsabilidad, que, de las pruebas realizadas con el material genético de la madre y el hijo, no se desprenden dudas razonables sobre la relación materno filial; haciéndose constar en la inscripción los resultados de dichas pruebas, junto con el resto de las establecidas en el párrafo primero del artículo 46 de esta Ley”.

Como punto de partida, debe tenerse en cuenta que el artículo 2.3 d) de la Ley Orgánica 15/1999 señala que los tratamientos efectuados por el Registro Civil y el Registro Central de Penados y rebeldes “se registrarán por sus disposiciones específicas, y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica”.

Esta dicción podría plantear problemas en cuanto a la interpretación que debería darse a esta disposición, en el sentido de determinar si la referencia a lo “especialmente previsto” ha de entenderse como referida a las disposiciones en que la Ley Orgánica se refiriera expresamente a los tratamientos mencionados en el artículo 2.3, lo que no sucede en ningún supuesto, si la misma se refiere a disposiciones generales, propias y singulares de la normativa de protección de datos de carácter personal, tales como las relacionadas con el respeto a los requisitos exigibles en materia de seguridad, la contratación de un encargado del tratamiento o la forma que deberá revestir la disposición de creación del fichero; o si, por el contrario, lo dispuesto en el artículo 2.3 implicaría una aplicación supletoria de la Ley Orgánica 15/1999, de suerte que los principios, derechos y obligaciones contenidos en la misma habrían integrar su regulación de forma que sean aplicables en defecto de norma específica que regulase los tratamientos enumerados en el precepto.

Esta última tesis parece ser la reconocida por el Consejo de Estado en su Dictamen de 15 de noviembre de 2007, emitido en relación con el entonces Proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, al indicar en su apartado 6.2 lo siguiente:

*“El artículo 2.2 de la LOPD regula lo que se han denominado “tratamientos excluidos”, en tanto que su artículo 2.3 trata de los ficheros a los que la LOPD es de aplicación supletoria, en todo aquello que no ha sido previsto por su normativa específica (por ejemplo, el censo electoral).”*

De este modo, y sin perjuicio de la dicción literal del artículo 2.3 de la Ley Orgánica, será preciso que las normas y principios contenidos en la Ley 20/2011 resulte enteramente congruente con lo establecido en la citada Ley



Orgánica 15/1999, respetando así los principios que la misma contiene, en particular los consagrados por su artículo 4, relacionados con la finalidad y proporcionalidad de los datos, así como su exactitud y conservación adecuada a la finalidad perseguida.

En este sentido, el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, añadiendo el artículo 4.2, en su primer inciso, que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

A fin de especificar cuál es la finalidad que justifica el tratamiento de datos por parte del Registro Civil, el artículo 2.2 de la Ley del Registro Civil clarifica que “el Registro Civil tiene por objeto hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas y aquellos otros que determine la presente Ley” y el artículo 4 de la Ley, a su vez dispone que “tienen acceso al Registro Civil los hechos y actos que se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias de la persona”.

De este modo, las informaciones que habrán de ser facilitadas y deberán ser objeto de inscripción en el Registro Civil habrán de ser las necesarias para la constancia de los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, no siendo ajustada a lo dispuesto en el artículo 4.1 la inclusión en el Registro de informaciones que no fueran relevante a tal efecto.

### III

Hechas las consideraciones precedentes, procede ahora analizar el contenido propuesto para el artículo 66 de la Ley del Registro Civil, al que se refiere el artículo segundo.seis del Anteproyecto sometido a informe. Dicho texto propone completar la actual dicción del precepto con un segundo inciso en que se prevé que “en el certificado, además de las circunstancias necesarias para la práctica de la inscripción, deberán recogerse aquellas que se precisen a los fines del Instituto Nacional de Estadística y, en todo caso, la existencia o no de indicios de muerte violenta, la incoación o no de diligencias judiciales o cualquier otro motivo por el que, a su juicio, no deba expedirse la licencia de enterramiento”.

Como se ha señalado, la finalidad del Registro Civil es la publicidad de los hechos y actos que afectan al estado civil de las personas. En particular, el artículo 62.1, en lo referente al asiento de defunción, dispone que “la inscripción en el Registro Civil de la defunción es obligatoria. La inscripción



hace fe de la muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en que se produce. En la inscripción debe figurar asimismo la identidad del fallecido”.

Ello implica que la finalidad del tratamiento de los datos relacionados con la inscripción de la defunción sería la constatación del hecho del fallecimiento de la persona a la que la misma se refiere, así como de la fecha y hora en que la misma tuvo lugar. De este modo, para dar fe de ese hecho, que extingue la personalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Código Civil no resultan relevantes más datos que los que constatan el hecho del fallecimiento, que es aquél del que dará fe pública el Registro.

Quiere ello decir que las informaciones a las que se refiere el Anteproyecto, en cuanto deberán constar en el certificado de defunción y comunicarse al Registro, relativas al modo, violento o no, en que tuvo lugar el fallecimiento o a la incoación de diligencias judiciales, que no guardan relación con la constancia médica del fallecimiento de la persona, carecen de relevancia para dar fe del hecho del fallecimiento, sin perjuicio de la relevancia que pudieran tener para otros fines distintos, como los estadísticos a los que se refiere el Anteproyecto.

La consecuencia de lo señalado es que, al margen del conocimiento que debiera tener el encargado del Registro Civil para la concesión de la licencia de enterramiento, a la que se refiere el artículo 62.4 de la Ley, los datos mencionados por el precepto no deberían incorporarse a la inscripción de la defunción ni ser objeto de la publicidad formal del Registro que la propia Ley determina, dado que no alteran el hecho relacionado con el estado civil de la persona, cual es el hecho de su fallecimiento y la fecha y hora en que el mismo tuvo lugar.

El propio Anteproyecto parece tener en cuenta esta circunstancia, por cuanto señala, dentro de la cláusula abierta contenida en la redacción propuesta en el artículo 66, que la información que habrá de facilitarse lo será en lo que se precise “a los fines del Instituto Nacional de Estadística”. Quiere ello decir que el propio texto pone de manifiesto que parte de la información facilitada no lo será para el cumplimiento de las obligaciones de comunicación del fallecimiento, establecidas en la propia Ley del registro Civil, sino a los fines establecidos en la normativa estadística y la inclusión que proceda de los datos en el Índice Nacional de Defunciones. De este modo, el Registro actuaría en este punto como depositario de la información, a fin de comunicar la misma a la Administración Estadística, lo que podría fundarse en la necesidad de agilizar los trámites relacionados con la defunción, sin que sea precisa la extensión de dos certificados, el primero de ellos con la finalidad de proceder a la inscripción de la defunción en el Registro y el segundo con el objetivo de facilitar al Instituto Nacional de Estadística la información que resulte relevante para el pleno cumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas adoptadas en desarrollo de la Ley reguladora de la Función Estadística Pública.



De este modo, si bien la lógica de la medida prevista en el Anteproyecto es ajustada a la simplificación de los trámites que se ha indicado, en lo que afecta a la cláusula abierta contenida en el artículo 66 propuesto y la información individualizada puede resultar relevante para la concesión de la licencia de enterramiento a la que se refiere el artículo 62.4, lo cierto es que tales informaciones carecen de relevancia en lo que respecta a la constatación y fe pública del hecho del fallecimiento como causa de extinción de la personalidad.

Por ello, si bien la aportación de las informaciones mencionadas puede resultar conforme a la normativa de protección de datos, resulta necesario que el texto deje plena constancia de que esos datos no se incorporarán ni serán objeto de testimonio por parte del Registro Civil, no incorporándose al asiento de defunción, que únicamente habría de incorporar los datos que hacen fe del hecho del fallecimiento y la información de la que dicho hecho trae causa, sin especificar la información adicional que la misma contuviera cuando se trate del citado certificado médico de defunción.

Por ello, entiende esta Agencia que **la reforma del artículo 66 debería completarse en el sentido de indicar que los datos mencionados en el segundo inciso del artículo 66 del Proyecto no serán incorporados a la inscripción de la defunción ni serán objeto del régimen de publicidad previsto en la Ley del registro Civil y que, además:**

- **Los que el certificado contenga relacionados con información estadística únicamente se custodiarán por el encargado del registro para su comunicación al Instituto Nacional de Estadística.**
- **Los mencionados expresamente en el segundo inciso únicamente serán utilizados con la finalidad de expedir la licencia de enterramiento a la que se refiere el artículo 62.4 de dicha Ley.**

#### IV

Procede ahora la valoración de las normas contenidas en el Anteproyecto relacionadas con las informaciones que habrían de ser facilitadas por los centros sanitarios para la determinación de la filiación de los recién nacidos.

En este punto, el apartado dos del artículo segundo del Anteproyecto modifica el artículo 46 de la Ley del registro Civil, introduciendo un nuevo inciso segundo al párrafo primero, en que a la cautela ya contenida en la redacción vigente del precepto, según la cual “el personal sanitario que asista al nacimiento deberá adoptar, bajo su responsabilidad, las cautelas necesarias para asegurar la identificación del recién nacido y efectuará las



comprobaciones que establezcan de forma indubitada la relación de filiación materna”, se establece que “reglamentariamente se determinarán las pruebas biométricas, médicas y analíticas precisas para asegurar dicha relación, así como la forma de hacer constar en el Registro sus resultados. En ningún caso será necesario el consentimiento de los progenitores para la toma de datos o muestras que permitan la correcta identificación del nacido, las cuales no podrán ser utilizadas para otros fines distintos de la identificación del nacido y la determinación de la relación materno-filial, dentro del correspondiente proceso penal o en caso de reclamación o impugnación judicial de la filiación materna”.

En correlación con esta norma, el apartado siete del artículo segundo añade un nuevo apartado 3 al artículo 67, indicando que “cuando el fallecimiento hubiere ocurrido con posterioridad a los seis primeros meses de gestación, antes del nacimiento, y siempre que el recién nacido hubiera fallecido antes de recibir el alta médica, después del parto, el certificado médico deberá ser firmado, al menos, por dos facultativos, quienes afirmarán, bajo su responsabilidad, que, de las pruebas realizadas con el material genético de la madre y el hijo, no se desprenden dudas razonables sobre la relación materno filial; haciéndose constar en la inscripción los resultados de dichas pruebas, junto con el resto de las establecidas en el párrafo primero del artículo 46 de esta Ley”.

Partiendo nuevamente de lo establecido en la Ley, el artículo 44.2 de la misma dispone que “la inscripción hace fe del hecho, fecha, hora y lugar del nacimiento, identidad, sexo y, en su caso, filiación del inscrito”, permaneciendo dicha redacción inalterada en el Anteproyecto. A tal efecto, en cuanto a la determinación de la filiación del recién nacido, el artículo segundo.uno del Anteproyecto establece una sustancial reforma del artículo 44, en cuanto al régimen de prueba de la filiación materna y presunciones de la filiación paterna, diferenciando entre la filiación matrimonial, la no matrimonial y la adoptiva.

Hechas estas consideraciones, como se ha dicho, el Anteproyecto exige completar el alcance de la información acreditativa de la filiación biológica del recién nacido, debiendo practicarse al mismo pruebas “biológicas, médicas y analíticas” que resulten precisas para asegurar la relación de filiación materna, correspondiendo a la norma reglamentaria de desarrollo del Anteproyecto la determinación de las pruebas que habrán de llevarse a cabo, que dado el tenor del precepto podrían incluso ser de carácter genético y, en todo caso, podrán tener carácter médico, por cuanto esta expresión se incluye en la literalidad de la norma.

Al propio tiempo, el Anteproyecto establece una cautela específica en relación con la realización de tales pruebas, que, según se indica, no requerirá “en ningún caso” del consentimiento de los progenitores ni podrá utilizarse para “otros fines distintos de la identificación del nacido y la determinación de la



relación materno-filial, dentro del correspondiente proceso penal o en caso de reclamación o impugnación judicial de la filiación materna”.

El precepto que ahora es objeto de estudio en este informe plantea diversas cuestiones relacionadas con su adecuada inclusión en la Ley del Registro Civil y su vinculación con la inscripción de nacimiento del recién nacido.

Como cuestión previa, no cabe duda de la relevancia de la realización de las pruebas mencionadas para determinar la filiación materna del recién nacido, lo que permitiría evitar situaciones anómalas en que involuntaria o deliberadamente se incorporase al Registro Civil información que no resulta ajustada a la realidad en relación con la filiación biológica del recién nacido. En este sentido, debe tenerse en cuenta el criterio reiteradamente puesto de manifiesto por esta Agencia en relación con las distintas cuestiones planteadas al mismo por el Ministerio de Justicia en relación con el tratamiento de datos en relación con los supuestos de sustracción de niños recién nacidos y la adopción de medidas que garanticen la exactitud de la filiación de los mismos, a partir del informe emitido en fecha 6 de marzo de 2012 y, en particular en el informe de 10 de septiembre de 2012, referido al entonces Proyecto de Orden por la que se crean determinados ficheros de datos de carácter personal relacionados con los supuestos de posible sustracción de recién nacidos y se aprueban los modelos oficiales de solicitud de información relacionados con esos supuestos.

De este modo, la realización de pruebas tendentes a garantizar el vínculo de la filiación materna del recién nacido puede considerarse adecuado en orden a garantizar la exactitud de la información que constate esa filiación. Ello no obstante, el problema se plantea en lo que afecta a la constatación de la información contenida en dichas pruebas en el Registro Civil y, en particular, en la inscripción del nacimiento.

En este punto, debe tenerse en cuenta que los datos referidos a los resultados de las pruebas “biométricas, médicas y analíticas”, que podrían ser incluso de naturaleza genética” han de ser considerados como datos relacionados con la salud de las personas, dado que el artículo 5.1 g) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 define los datos de carácter personal relacionados con la salud como “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética”.

Al propio tiempo, debe tenerse en cuenta que las pruebas a las que se refiere el precepto podrían considerarse parte integrante de la historia clínica de la madre y del propio recién nacido, resultando aplicables a las mismas las



normas contenidas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Esta circunstancia permitiría, siempre que así se estableciese en la propia Ley 41/2002, excluir la exigencia del consentimiento de los progenitores, debiendo además señalarse que si las pruebas tienen por objeto la determinación de la filiación materna puede resultar dudosa la exigencia del consentimiento del padre, que tendrá tal condición en virtud del régimen de presunciones establecido en el Código Civil y en la propia Ley del Registro Civil.

Además, es preciso señalar que el propio artículo 46, en la versión resultante del Anteproyecto prevé un efecto mucho más limitado de la información relacionada con la determinación de la filiación que la propia del régimen general de la publicidad registral, dado que dicha información únicamente puede ser empleada para la identificación del recién nacido y la determinación de la filiación “dentro del correspondiente proceso penal o en caso de reclamación o impugnación judicial de la filiación materna”. Esta restricción de la finalidad en el uso de los datos exige que el acceso a los mismos haya de ser restringido y limitado exclusivamente a los interesados o al órgano jurisdiccional ante el que se tramitase el correspondiente proceso civil o penal en que fuera precisa la obtención de la información relacionada con la determinación de la filiación materna. Sin embargo, el Anteproyecto no establece ninguna limitación al alcance de la publicidad de “los resultados” de las pruebas, ni los considera información especialmente protegida, a los efectos previstos, en cuanto a su publicidad, en el Capítulo II del Título VII de la Ley del Registro Civil.

En consecuencia, el Anteproyecto estaría previendo la incorporación al mismo de datos relacionados con la salud de las personas que aun pudiendo resultar relevantes para la determinación de la filiación del recién nacido habrían de formar parte de la historia clínica del mismo, no estableciendo ningún límite específico en cuanto al acceso a tales informaciones, pese a indicar el propio texto que el uso de tales datos estará limitado a finalidades absolutamente limitadas.

Por este motivo, esta Agencia considera que el registro no sería el lugar idóneo para reflejar los datos relacionados con el resultado de las pruebas practicadas, si bien podría contener información acerca de su efectiva realización e incluso remitir a la historia clínica en que dicha información habría de conservarse.

Por otra parte, la conclusión que se ha indicado, teniendo en cuenta que la finalidad de la realización de las pruebas sería precisamente la de garantizar la existencia de una prueba médica acreditativa de la filiación debería preverse en la normativa reguladora de las historias clínicas la obligación de conservación de esta información, que habría de extenderse, en principio, durante toda la vida del recién nacido, limitándose el acceso a los datos a los



supuestos planteados en el artículo 46 en la redacción contenida en el Anteproyecto.

De todo ello se desprende que, a juicio de esta Agencia, sería necesario modificar el Anteproyecto sometido a informe en los siguientes términos:

**1. Modificar el apartado uno del artículo segundo en el sentido de alterar la redacción dada al primer párrafo del artículo 46 de la Ley del Registro Civil, pasando a indicar lo siguiente:**

“La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comunicará en el plazo de veinticuatro horas a la Oficina del Registro Civil que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario. El personal sanitario que asista al nacimiento deberá adoptar, bajo su responsabilidad, las cautelas necesarias para asegurar la identificación del recién nacido y efectuará las comprobaciones que establezcan de forma indubitada la relación de filiación materna, **incluyendo las** pruebas biométricas, médicas y analíticas **que resulten necesarias para ello conforme a la legislación reguladora de las historias clínicas. El Registro Civil hará constar la realización de dichas pruebas y el centro sanitario que conserva de la información relacionada con las mismas.**”

**2. Modificar el apartado siete del artículo segundo del Anteproyecto, pasando a tener el artículo 67.3 de la Ley cuya reforma se propone, el siguiente tenor:**

“3. Cuando el fallecimiento hubiere ocurrido con posterioridad a los seis primeros meses de gestación, antes del nacimiento, y siempre que el recién nacido hubiera fallecido antes de recibir el alta médica, después del parto, el certificado médico deberá ser firmado, al menos, por dos facultativos, quienes afirmarán, bajo su responsabilidad, que, de las pruebas realizadas con el material genético de la madre y el hijo, no se desprenden dudas razonables sobre la relación materno filial; haciéndose constar en la inscripción **la realización** de dichas pruebas, junto con **la** del resto de las establecidas en el párrafo primero del artículo 46 de esta Ley.”

**3. Incluir un nuevo artículo tres, por el que se proceda a la reforma de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,**

**- Añadir un último párrafo al artículo 15.2, en que se indique lo siguiente:**

**“Cuando se trate del nacimiento, la historia clínica incorporará además de la información a la que hace referencia este apartado los**





**resultados de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre, en los términos que se establezcan reglamentariamente.”**

**- Añadir al artículo 17.1 un segundo párrafo con el siguiente tenor:**

**“No obstante, la conservación de los datos de la historia clínica relacionados con el nacimiento del paciente, incluidos los resultados de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre, se conservarán, como mínimo durante toda la vida del paciente.”**

**- Añadir al artículo 17.2 un segundo párrafo con el siguiente texto:**

**“Sin perjuicio del derecho al que se refiere el artículo siguiente, los datos de la historia clínica relacionados con las pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre del recién nacido, sólo podrán ser comunicados a petición judicial, dentro del correspondiente proceso penal o en caso de reclamación o impugnación judicial de la filiación materna.”**